

PORTUGAL

Dionisio LLAMAZARES FERNÁNDEZ
Universidad Complutense de Madrid

Ley de Libertad Religiosa de 2001

La Constitución portuguesa consagra los derechos de libertad de conciencia (art. 41) e igualdad (art. 13.1 y 2), con exclusión de cualquier tipo de discriminación tanto negativa como positiva; consagra asimismo el principio de separación entre el Estado y las Iglesias o Confesiones religiosas y la plena autonomía de éstas en sus asuntos internos (art. 41.4) y, consecuentemente, establece su separación tanto de los partidos políticos (art. 51.3) como de los sindicatos (art.55.4); consagra, por último, el principio de neutralidad estatal en la programación de la educación y de la cultura (art. 43.2). Además, tanto los derechos fundamentales como el principio de separación se tipifican como no susceptibles de reforma constitucional (art. 288.1,c y d).

De hecho, sin embargo, ni la igualdad es completa ni la separación es total⁸⁴⁴.

La llamada Ley de libertad religiosa vigente hasta la promulgación de la que hoy comentamos era anterior a la Constitución 1971, y no era aplicable a la Iglesia católica que se sometía a una legislación especial —el Concordato de 1940, sólo parcialmente reformado en 1975 en relación con la aplicabilidad del divorcio a los matrimonios canónicos—. Ambas normas se guarecen bajo el paraguas de la ley de separación de 1911 que, a pesar de tal denominación, responde a los principios del jurisdiccionalismo en el que tanto el Estado como la Iglesia permiten al otro la intervención en los asuntos propios.

La nueva Ley pretende paliar en lo posible la vigente situación de desigualdad, extendiendo los beneficios de que disfruta la Iglesia Católica a las demás confesiones en la medida en que no entren en colisión con los principios de separación (neutralidad y separación) y de igualdad. La Iglesia católica podría encontrar en la nueva ley una

⁸⁴⁴ CANAS, V., “Estado e Iglesia en Portugal”, en *Estado e Iglesia en la Unión Europea*, Madrid, 1996, p. 266.

cobertura muy cercana a la actual, desaparecidos, eso sí, los privilegios. No obstante, la ley excluye de su aplicación, de forma expresa, a la Iglesia católica, pero podría funcionar de puente hacia una nueva situación en la que fuera también aplicable a esta última, favoreciendo las negociaciones conducentes a una reforma en este sentido del vigente Concordato.

La nueva Ley comienza formulando como principios fundamentales el de libertad de conciencia (art. 1), tanto individual (arts. 7 al 19) como colectiva (arts. 20 y siguientes), el de igualdad no sólo entre individuos sino entre grupos (art. 2) y confesiones, los de neutralidad y separación del Estado con respecto a las Iglesias y confesiones, garantizando la independencia y autonomía, tanto de las confesiones respecto del Estado (art. 3) como del Estado respecto de las doctrinas de aquellas (art. 5), el de cooperación, que se concreta como cooperación con la Iglesias y comunidades religiosas con arraigo en Portugal, teniendo en cuenta su representatividad, con vistas expresamente a la promoción de los derechos humanos, el desarrollo integral de la persona y los valores de paz, libertad, solidaridad y tolerancia (art. 5) y, finalmente, el principio de tolerancia como criterio para resolver los posibles conflictos entre los derechos de libertad de conciencia de distintas personas (art. 7).

Según la ley, las Iglesias y comunidades religiosas son comunidades sociales organizadas y duraderas en las que los creyentes pueden desarrollar todos los fines religiosos que les son propuestos por la respectiva confesión (art. 20). Características de tales grupos son por tanto estas dos: 1) duración indefinida, lo que excluye a las asociaciones constituidas con carácter temporal aunque tengan fines religiosos (realización de una peregrinación) y 2) globalidad o totalidad, quedando excluidas aquellas que sólo permiten realizar algunos de esos fines religiosos (órdenes o congregaciones religiosas).

La ley no aporta una definición cerrada de fin religioso, pero explicita algunos ejemplos, tanto en sentido positivo —ejercicio del culto y de los ritos correspondientes, formación de los ministros de culto, difusión de la confesión profesada y enseñanza de la religión (art. 21, a)—, como por vía negativa —asistencia, beneficencia, educación y cultura, amén de los comerciales y de lucro (art. 21, b)—. Una nueva relación de estos últimos volvemos a encontrarla en el artículo 27.

En todo caso, la separación entre fines religiosos y no religiosos deberá hacerse sobre la base de la noción amplia de religión de acuerdo con el criterio del Comité de Derechos Humanos en su interpretación del art. 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que incluye las creencias teístas, ateístas y ateas, ya que, por un lado, Portugal ha ratificado ese Pacto que rige como derecho interno (art. 8.2 de la Constitución), y por otro, las normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales deberán interpretarse de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16.2 de la Constitución).

Por lo que se refiere a las confesiones religiosas como cauce para el ejercicio de la libertad de conciencia la Ley contempla cuatro situaciones posibles.

a) Confesiones no inscritas.

Aún sin inscripción, son titulares de todos los derechos colectivos que forman parte del derecho de libertad religiosa, es decir, los enumerados en los arts. 22.1 y 2, 23, e, incluso, en el 30 (acuerdo o audiencia previa en caso de demolición de un edificio religioso) y en el 31 (ingresos libres de impuestos, donaciones y colectas, y distribución gratuita de publicaciones).

b) Confesiones inscritas como *asociaciones civiles con fines religiosos* en el Registro General de personas colectivas.

En esa situación quedarían las confesiones inscritas actualmente en el Ministerio de Justicia, que serían inscritas de oficio en el Registro Nacional (art. 63.3), conservando su personalidad jurídica y su capacidad, y quedando sujetas sus actividades religiosas a lo dispuesto en el artículo 44 (art. 63.1), si en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de la ley no hubieran solicitado su inscripción en el nuevo registro especial con arreglo a la nueva ley, transformándose entonces en personas jurídicas religiosas en los términos de los artículos 34 al 40 (art. 63.2).

Aparte de los derechos de los que son titulares las confesiones no inscritas, las que nos ocupan son titulares también de aquellos otros cuyo ejercicio depende de la personalidad jurídica, pero no así del derecho al reconocimiento público de su carácter religioso, que deberán probar para que tenga efectos frente a terceros. La diferencia está en que las inscritas en el Registro General, al solicitar ese reconocimiento, deberán demostrar que son confesiones religiosas en

el sentido de los artículos 20 y 21, en tanto que las inscritas en el Registro especial de comunidades religiosas no tienen que hacer tal demostración; esa inscripción es suficiente.

c) Confesiones inscritas en el Registro especial de entidades religiosas del Ministerio de Justicia.

Para su inscripción como tales, aparte de los datos y documentos a los que se refiere el art. 34, deberán añadir prueba documental (art. 35): 1) de los principios generales de su doctrina, con descripción general de la práctica religiosa y de los actos de culto, y de los derechos y deberes de los creyentes para con la Iglesia o Confesión, debiéndose presentar además un sumario (resumen) de estos elementos; y 2) de su existencia en Portugal, con especial insistencia en los hechos que testifican su presencia social organizada, su práctica religiosa y su duración (permanencia) en Portugal.

Según el art. 34 la solicitud de inscripción deberá dirigirse al Ministro de Justicia acompañada de los Estatutos y la documentación que permita inscribir los siguientes datos:

- 1) El nombre que permita distinguirla de cualquier otra persona colectiva religiosa existente en Portugal.
- 2) La constitución, institución o establecimiento en Portugal de la organización correspondiente a la Iglesia o comunidad religiosa o el acto de constitución o fundación y, eventualmente, también el reconocimiento de la persona religiosa colectiva.
- 3) La sede en Portugal.
- 4) Los fines religiosos
- 5) Los bienes o servicios que integran o deberán integrar el patrimonio.
- 6) Las disposiciones sobre formación, composición, competencia y funcionamiento de sus órganos.
- 7) Las disposiciones sobre la extinción de la persona colectiva.
- 8) El modo de designación y los poderes de sus representantes.

9) La identificación de los titulares de los órganos en función activa y de los representantes, con especificación de la competencia de estos últimos.

La inscripción sólo puede ser denegada por falta de los requisitos legales, falsificación de documento o violación de los límites constitucionales de la libertad religiosa (art. 39)

Pasado un año desde la solicitud de inscripción sin que se haya hecho notificación de la denegación, la Administración está obligada a inscribir: su silencio durante ese tiempo tiene valor positivo (art. 40).

Además de los derechos que forman parte del contenido del derecho de libertad de conciencia y religiosa de los que son titulares todas las confesiones incluso las no inscritas (arts 22, 23, 30, 31), les corresponden, según la Ley, los siguientes:

1º.- Derecho de sus ministros de culto (art. 16.4) a las prestaciones de la Seguridad Social, siendo obligación de la confesión religiosa su inscripción, salvo que su actividad religiosa fuera secundaria en relación con otra actividad principal ejercida por ellos, así como al secreto profesional (art. 16.2).

2º.- Los alumnos de los centros de formación de ministros de culto y, por supuesto, los ministros de culto cumplen sus deberes militares participando en las actividades de asistencia religiosa salvo que prefieran cumplir los servicios ordinarios (art.17.1), y la participación en cursos de formación de ministros de culto es motivo suficiente para la dispensa de las pruebas de clasificación y selección para el servicio militar así como del añadido de la incorporación (art.17.2).

3º.- Derecho a solicitar del Ministro de Educación que se les permita impartir enseñanza religiosa en los niveles primario y secundario (art. 24.1). Esta enseñanza se concibe como opcional y en ningún caso como alternativa a una enseñanza curricular (art. 24.2)

4º.- Derecho de acceso a los medios públicos de difusión para difundir sus propio credo en cumplimiento de sus fines religiosos (art. 25).

5º.- Derecho de *audiencia previa* respecto a las decisiones relativas a la afectación de terrenos para fines religiosos en los planeamientos territoriales de zonas en las que las Iglesias y Comunidades religiosas tengan presencia social organizada (art.

28), así como en los casos de expropiación, requisita o demolición de un edificio dedicado a fines religiosos (art. 29.2).

6º.- La demolición o cambio de destino de un templo, edificio, dependencia u objeto de culto, salvo en caso de expropiación por razón de utilidad pública o de requisita por urgente necesidad pública, exige el *previo acuerdo* con la Iglesia o comunidad religiosa respectiva (art. 29.1) y en ningún caso será utilizado para fines no religiosos sin antes haber sido privados de su carácter religioso por la respectiva Iglesia o confesión (art.29.3).

7º.- Derecho a importantes beneficios fiscales, tanto desgravaciones (art. 31.1), como tratamiento favorable de las donaciones que reciban (art.31.2).

8º.- Derecho a fundar o reconocer iglesias y comunidades religiosas de ámbito regional o local, institutos de vida consagrada y otros institutos, con naturaleza de asociaciones o fundaciones, para el ejercicio o para el mantenimiento de sus funciones religiosas (art. 23.3).

Entre los derechos comunes a todas las confesiones (arts 22 y 23) merecen ser destacados los siguientes:

- 1) Autonomía respecto de sus asuntos internos (organización y funcionamiento, determinación de los derechos y deberes de sus miembros y participación en Federaciones o asociaciones interconfesionales).
 - 2) Derecho a incluir en su legislación interna cláusulas de salvaguardia de su identidad religiosa.
 - 3) Libertad en el ejercicio del culto (celebración de actos de culto, fijación de lugares de culto, formación de sus ministros, enseñanza y asistencia religiosa, relacionarse con otras organizaciones religiosas, etc.).
 - 4) No están sujetas a impuestos ni los donativos o prestaciones de los fieles para el culto, ni los ingresos por colectas públicas dentro de los edificios propios, ni por la distribución gratuita de publicaciones con declaraciones, avisos o instrucciones en materia religiosa (art.31).
- d) Confesiones *con arraigo* en Portugal (art. 36).

Se consideran como tales aquellas que ofrecen garantía de duración y estabilidad, y es al Ministro de Justicia a quien se le

atribuye la competencia para tal reconocimiento, teniendo en cuenta el número de creyentes y la historia de su existencia en Portugal, previo informe de la Comisión de libertad religiosa (art.37.1).

La solicitud de ese reconocimiento sólo puede presentarse por las confesiones que puedan demostrar su presencia social organizada en el país por un tiempo no inferior a los 30 años, salvo que, siendo de origen extranjero tengan un tiempo de existencia desde su fundación no inferior a los 60 años (art.37.2).

A estas Iglesias y comunidades religiosas se reservan los siguientes derechos:

1º.- El reconocimiento de efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa correspondiente (art. 19).

2º.- Derecho a estar representadas (participación) en la Comisión de Tiempos de Emisión en los medios de difusión de las confesiones religiosas (art. 25.3).

3º.- Derecho a beneficiarse del sistema de asignación tributaria, es decir del 0,5 % del IRPF que hayan destinado a su favor los contribuyentes (art. 32. 4), salvo que prefieran optar por el régimen previsto en art. 1 del Decreto-Ley nº 20/90, de 13 de Enero (art. 65.1).

4º.- Derecho a estar representadas (participación) en la Comisión de libertad religiosa (art. 56.1,a).

5º). Habilitación para la firma de acuerdos con el Estado (art. 45) que luego deberán ser aprobados por ley (art. 49).

Assembleia da República: DECRETO N.º 66/VIII

LEI DA LIBERDADE RELIGIOSA

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, para valer como lei geral da República, o seguinte:

Capítulo I
Princípios

Artigo 1.º Liberdade de consciência, de religião e de culto

A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável e garantida a todos em conformidade com a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o direito internacional aplicável e a presente lei.

Artigo 2.º Princípio da igualdade

1 — Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, perseguido, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever por causa das suas convicções ou prática religiosa.

2 — O Estado não discriminará nenhuma igreja ou comunidade religiosa relativamente às outras.

Artigo 3.º Princípio da separação

As igrejas e demais comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua organização e no exercício das suas funções e do culto.

Artigo 4.º Princípio da não confessionalidade do Estado

1 — O Estado não adopta qualquer religião, nem se pronuncia sobre questões religiosas.

2 — Nos actos oficiais e no protocolo de Estado será respeitado o princípio da não confessionalidade.

3 — O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes religiosas.

4 — O ensino público não será confessional.

Artigo 5.º Princípio da cooperação

O Estado cooperará com as igrejas e comunidades religiosas radicadas em Portugal, tendo em consideração a sua representatividade, com vista designadamente à promoção dos direitos humanos, do desenvolvimento integral de cada pessoa e dos valores da paz, da liberdade, da solidariedade e da tolerância.

Artigo 6.º Força jurídica

1 — A liberdade de consciência, de religião e de culto só admite as restrições necessárias para salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente protegidos.

2 — A liberdade de consciência, de religião e de culto não autoriza a prática de crimes.

3 — Os limites do direito à objecção de consciência demarcam para o objector o comportamento permitido.

4 — A lei pode regular, sempre que necessário, o exercício da liberdade de consciência, de religião e de culto, sem prejuízo da existência de tal liberdade.

5 — A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência em nenhum caso pode afectar a liberdade de consciência e de religião.

Artigo 7.º Princípio da tolerância

Os conflitos entre a liberdade de consciência, de religião e de culto de uma pessoa e a de outra ou outras resolver-se-ão com tolerância, de modo a respeitar quanto possível a liberdade de cada uma.

Capítulo II

Direitos individuais de liberdade religiosa

Artigo 8.º Conteúdo da liberdade de consciência, de religião e de culto

A liberdade de consciência, de religião e de culto compreende o direito de:

- a) Ter, não ter e deixar de ter religião;
- b) Escolher livremente, mudar ou abandonar a própria crença religiosa;
- c) Praticar ou não praticar os actos do culto, particular ou público, próprios da religião professada;
- d) Professar a própria crença religiosa, procurar para ela novos crentes, exprimir e divulgar livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento em matéria religiosa;
- e) Informar e se informar sobre religião, aprender e ensinar religião;
- f) Reunir-se, manifestar-se e associar-se com outros de acordo com as próprias convicções em matéria religiosa, sem outros limites além dos previstos nos artigos 45.º e 46.º da Constituição;
- g) Agir ou não agir em conformidade com as normas da religião professada, no respeito pelos direitos humanos e pela lei;

- h) Escolher para os filhos os nomes próprios da onomástica religiosa da religião professada;
- i) Produzir obras científicas, literárias e artísticas em matéria de religião.

Artigo 9.º Conteúdo negativo da liberdade religiosa

1 — Ninguém pode:

- a) Ser obrigado a professar uma crença religiosa, a praticar ou a assistir a actos de culto, a receber assistência religiosa ou propaganda em matéria religiosa;
- b) Ser coagido a fazer parte, a permanecer ou a sair de associação religiosa, igreja ou comunidade religiosa, sem prejuízo das respectivas normas sobre a filiação e a exclusão de membros;
- c) Ser perguntado por qualquer autoridade acerca das suas convicções ou prática religiosa, salvo para recolha de dados estatísticos não individualmente identificáveis, nem ser prejudicado por se recusar a responder;
- d) Ser obrigado a prestar juramento religioso.

2 — A informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções pessoais ou fé religiosa, salvo mediante consentimento expresse do titular ou para processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis.

Artigo 10.º Direitos de participação religiosa

A liberdade de religião e de culto compreende o direito de, de acordo com os respectivos ministros do culto e segundo as normas da igreja ou comunidade religiosa escolhida:

- a) Aderir à igreja ou comunidade religiosa que escolher, participar na vida interna e nos ritos religiosos praticados em comum e receber a assistência religiosa que pedir;
- b) Celebrar casamento e ser sepultado com os ritos da própria religião;
- c) Comemorar publicamente as festividades religiosas da própria religião.

Artigo 11.º Educação religiosa dos menores

1 — Os pais têm o direito de educação dos filhos em coerência com as próprias convicções em matéria religiosa, no respeito da integridade moral e física dos filhos e sem prejuízo da saúde destes.

2 — Os menores, a partir dos 16 anos de idade, têm o direito de realizar por si as escolhas relativas a liberdade de consciência, de religião e de culto.

Artigo 12.º Objecção de consciência

1 — A liberdade de consciência compreende o direito de objectar ao cumprimento de leis que contrariem os ditames impreteríveis da própria consciência, dentro dos limites dos direitos e deveres impostos pela Constituição e nos termos da lei que eventualmente regular o exercício da objecção de consciência.

2 — Consideram-se impreteríveis aqueles ditames da consciência cuja violação implica uma ofensa grave à integridade moral que torne inexigível outro comportamento.

3 — Os objectores de consciência ao serviço militar, sem exceptuar os que invocam também objecção de consciência ao serviço cívico, têm direito a um regime do serviço cívico que respeite, na medida em que isso for compatível com o princípio da igualdade, os ditames da sua consciência.

Artigo 13.º Assistência religiosa em situações especiais

1 — A qualidade de membro das forças armadas, das forças de segurança ou de polícia, a prestação de serviço militar ou de serviço cívico, o internamento em hospitais, asilos, colégios, institutos ou estabelecimentos de saúde, de assistência, de educação ou similares, a detenção em estabelecimento prisional ou outro lugar de detenção não impedem o exercício da liberdade religiosa e, nomeadamente, do direito à assistência religiosa e à prática dos actos de culto.

2 — As restrições imprescindíveis por razões funcionais ou de segurança só podem ser impostas mediante audiência prévia, sempre que possível, do ministro do culto respectivo.

3 — O Estado, com respeito pelo princípio da separação e de acordo com o princípio da cooperação, deverá criar as condições adequadas ao exercício da assistência religiosa nas instituições públicas referidas no n.º 1.

Artigo 14.º Dispensa do trabalho, de aulas e de provas por motivo religioso

1 — Os funcionários e agentes do Estado e demais entidades públicas, bem como os trabalhadores em regime de contrato de trabalho, têm o direito de, a seu pedido, suspender o trabalho no dia de descanso semanal, nos dias das festividades e nos períodos horários que lhes sejam prescritos pela confissão que professam, nas seguintes condições:

a) Trabalhem em regime de flexibilidade de horário;

b) Serem membros de igreja ou comunidade religiosa inscrita que enviou no ano anterior ao membro do Governo competente em razão da matéria a indicação dos referidos dias e períodos horários no ano em curso;

c) Haver compensação integral do respectivo período de trabalho.

2 — Nas condições previstas na alínea b) do número anterior, são dispensados da frequência das aulas nos dias de semana consagrados ao repouso e culto pelas respectivas confissões religiosas os alunos do ensino público ou privado que as professam, ressalvadas as condições de normal aproveitamento escolar.

3 — Se a data de prestação de provas de avaliação dos alunos coincidir com o dia dedicado ao repouso ou ao culto pelas respectivas confissões religiosas, poderão essas provas ser prestadas em segunda chamada, ou em nova chamada, em dia em que se não levante a mesma objecção.

Artigo 15.º **Ministros do culto**

1 — Ministros do culto são as pessoas como tais consideradas segundo as normas da respectiva igreja ou comunidade religiosa.

2 — A qualidade de ministro do culto é certificada pelos órgãos competentes da respectiva igreja ou comunidade religiosa, que igualmente credenciam os respectivos ministros para a prática de actos determinados.

3 — A autenticação dos certificados e das credenciais referidos no número anterior compete ao registo das pessoas colectivas religiosas.

Artigo 16.º **Direitos dos ministros do culto**

1 — Os ministros do culto têm a liberdade de exercer o seu ministério.

2 — Os ministros do culto não podem ser perguntados pelos magistrados ou outras autoridades sobre factos e coisas de que tenham tido conhecimento por motivo do seu ministério.

3 — O exercício do ministério é considerado actividade profissional do ministro do culto quando lhe proporciona meios de sustento, bastando como prova destes para efeito da autorização de residência a ministros do culto estrangeiros a sua garantia pela respectiva igreja ou comunidade religiosa.

4 — Os ministros do culto das igrejas e demais comunidades religiosas inscritas têm direito às prestações do sistema de segurança social nos termos da lei, sendo obrigatoriamente inscritos pela igreja ou comunidade religiosa a que pertençam, salvo se exercerem por forma secundária a actividade religiosa e o exercício da actividade principal não religiosa determinar a inscrição obrigatória num regime de segurança social.

5 — Para os efeitos dos dois números anteriores, equiparam-se aos ministros do culto os membros de institutos de vida consagrada e outras pessoas que exercem profissionalmente actividades religiosas e que, como tais, sejam certificadas pela igreja ou comunidade religiosa a que pertencam.

Artigo 17.º Serviço militar dos ministros do culto

1 — As obrigações militares dos alunos dos estabelecimentos de formação de ministros do culto, dos membros dos institutos de vida consagrada, bem como dos ministros do culto das igrejas e demais comunidades religiosas inscritas são cumpridas nos serviços de assistência religiosa, de saúde e de acção social das Forças Armadas, a não ser que manifestem o desejo de prestarem serviço efectivo.

2 — Constitui motivo de dispensa das provas de classificação e selecção para o serviço militar, bem como de adiamento da incorporação, a frequência de cursos de formação de ministros do culto de igreja ou comunidade religiosa inscrita.

3 — Fica ressalvado o direito a objecção de consciência ao serviço militar, nos termos gerais.

Artigo 18.º Escusa de intervenção como jurado

Os ministros do culto, os membros dos institutos de vida consagrada e outras pessoas que exerçam profissionalmente actividades religiosas de igrejas ou de outras comunidades religiosas inscritas podem pedir escusa de intervenção como jurados.

Artigo 19.º Casamento por forma religiosa

1 — São reconhecidos efeitos civis ao casamento celebrado por forma religiosa perante o ministro do culto de uma igreja ou comunidade religiosa radicada no País. O ministro do culto deverá ter a nacionalidade portuguesa ou, sendo estrangeiro, não nacional de Estado membro da União Europeia, ter autorização de residência temporária ou permanente em Portugal.

2 — Aqueles que pretendam contrair casamento por forma religiosa deverão declará-lo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, no requerimento de instauração do respectivo processo de publicações na conservatória do registo civil competente, indicando o ministro do culto credenciado para o acto. A declaração para casamento pode ainda ser prestada pelo ministro do culto, mediante requerimento por si assinado.

3 — Autorizada a realização do casamento, o conservador passa o certificado para casamento, nos termos dos artigos 146.º e 147.º do Código do Registo Civil, com as necessárias adaptações. O certificado não é passado sem que o conservador se tenha assegurado de que os

nubentes têm conhecimento dos artigos 1577.º, 1600.º, 1671.º e 1672.º do Código Civil. O certificado deve conter menção deste facto, bem como do nome e da credenciação do ministro do culto. O certificado é remetido oficiosamente ao ministro do culto, a quem são igualmente comunicados os impedimentos de conhecimento superveniente.

4 — É indispensável para a celebração do casamento a presença:

- a) Dos contraentes, ou de um deles e do procurador do outro;
- b) Do ministro do culto, devidamente credenciado;
- c) De duas testemunhas.

5 — Logo após a celebração do casamento, o ministro do culto lavra assento em duplicado no livro de registo da igreja ou da comunidade religiosa e envia à conservatória competente, dentro do prazo de três dias, o duplicado do assento, a fim de ser transcrito no livro de assentos de casamento.

6 — O conservador deve efectuar a transcrição do duplicado dentro do prazo de dois dias e comunicá-la ao ministro do culto até ao termo do dia imediato àquele em que foi feita.

Capítulo III

Direitos colectivos de liberdade religiosa

Artigo 20.º Igrejas e comunidades religiosas

As igrejas e as comunidades religiosas são comunidades sociais organizadas e duradouras em que os crentes podem realizar todos os fins religiosos que lhes são propostos pela respectiva confissão.

Artigo 21.º Fins religiosos

1 — Independentemente de serem propostos como religiosos pela confissão, consideram-se, para efeitos da determinação do regime jurídico:

- a) Fins religiosos, os de exercício do culto e dos ritos, de assistência religiosa, de formação dos ministros do culto, de missionação e difusão da confissão professada e de ensino da religião;
- b) Fins diversos dos religiosos, entre outros, os de assistência e de beneficência, de educação e de cultura, além dos comerciais e de lucro.

2 — As actividades com fins não religiosos das igrejas e comunidades religiosas estão sujeitas ao regime jurídico e, em especial, ao regime fiscal desse género de actividades.

Artigo 22.º Liberdade de organização das igrejas e comunidades religiosas

1 — As igrejas e demais comunidades religiosas são livres na sua organização, podendo dispor com autonomia sobre:

- a) A formação, a composição, a competência e o funcionamento dos seus órgãos;
- b) A designação, funções e poderes dos seus representantes, ministros, missionários e auxiliares religiosos;
- c) Os direitos e deveres religiosos dos crentes, sem prejuízo da liberdade religiosa destes;
- d) A adesão ou a participação na fundação de federações ou associações interconfessionais, com sede no País ou no estrangeiro.

2 — São permitidas cláusulas de salvaguarda da identidade religiosa e do carácter próprio da confissão professada.

3 — As igrejas e demais comunidades religiosas inscritas podem com autonomia fundar ou reconhecer igrejas ou comunidades religiosas de âmbito regional ou local, institutos de vida consagrada e outros institutos, com a natureza de associações ou de fundações, para o exercício ou para a manutenção das suas funções religiosas.

Artigo 23.º Liberdade de exercício das funções religiosas e do culto

As igrejas e demais comunidades religiosas são livres no exercício das suas funções e do culto, podendo, nomeadamente, sem interferência do Estado ou de terceiros:

- a) Exercer os actos de culto, privado ou público, sem prejuízo das exigências de polícia e trânsito;
- b) Estabelecer lugares de culto ou de reunião para fins religiosos;
- c) Ensinar na forma e pelas pessoas por si autorizadas a doutrina da confissão professada;
- d) Difundir a confissão professada e procurar para ela novos crentes;
- e) Assistir religiosamente os próprios membros;
- f) Comunicar e publicar actos em matéria religiosa e de culto;
- g) Relacionar-se e comunicar com as organizações da mesma ou de outras confissões no território nacional ou no estrangeiro;
- h) Designar e formar os seus ministros;
- i) Fundar seminários ou quaisquer outros estabelecimentos de formação ou cultura religiosa.

Artigo 24.º Ensino religioso nas escolas públicas

1 — As igrejas e demais comunidades religiosas ou, em sua vez, as organizações representativas dos crentes residentes em território nacional, desde que inscritas, por si, ou conjuntamente, quando para o efeito professem uma única confissão ou acordem num programa comum, podem requerer ao membro do Governo competente em razão da matéria que lhes seja permitido ministrar ensino religioso nas

escolas públicas do ensino básico e do ensino secundário que indicarem.

2 — A educação moral e religiosa é opcional e não alternativa relativamente a qualquer área ou disciplina curricular.

3 — O funcionamento das aulas de ensino religioso de certa confissão ou programa depende da existência de um número mínimo de alunos, que tenham, pelo encarregado de educação ou por si, sendo maiores de 16 anos, manifestado, expressa e positivamente, o desejo de frequentar a disciplina.

4 — Os professores a quem incumbe ministrar o ensino religioso não leccionarão cumulativamente aos mesmos alunos outras áreas disciplinares ou de formação, salvo situações devidamente reconhecidas de manifesta dificuldade na aplicação do princípio e serão nomeados ou contratados, transferidos e excluídos do exercício da docência da disciplina pelo Estado, de acordo com os representantes das igrejas, comunidades ou organizações representativas. Em nenhum caso o ensino será ministrado por quem não seja considerado idóneo pelos respectivos representantes.

5 — Compete às igrejas e demais comunidades religiosas formar os professores, elaborar os programas e aprovar o material didáctico, em harmonia com as orientações gerais do sistema do ensino.

Artigo 25.º Tempos de emissão religiosa

1 — Nos serviços públicos de televisão e de radiodifusão é garantido às igrejas e demais comunidades religiosas inscritas, por si, através da respectiva organização representativa, ou conjuntamente, quando preferirem participar como se fossem uma única confissão, um tempo de emissão, fixado globalmente para todas, para prossecução dos seus fins religiosos.

2 — A atribuição e distribuição do tempo de emissão referido no número anterior é feita tendo em conta a representatividade das respectivas confissões e o princípio da tolerância, por meio de acordos entre a Comissão do Tempo de Emissão das Confissões Religiosas e as empresas titulares dos serviços públicos de televisão e de radiodifusão.

3 — A Comissão do Tempo de Emissão das Confissões Religiosas é constituída por representantes da Igreja Católica e das igrejas e comunidades religiosas radicadas no País ou das federações em que as mesmas se integrem, designados por três anos por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da Justiça e da comunicação social, depois de ouvida a Comissão da Liberdade Religiosa.

Artigo 26.º Abate religioso de animais

O abate religioso de animais deve respeitar as disposições legais aplicáveis em matéria de protecção dos animais.

Artigo 27.º Actividades com fins não religiosos das igrejas e demais comunidades religiosas

As igrejas e outras comunidades religiosas podem ainda exercer actividades com fins não religiosos que sejam instrumentais, consequenciais ou complementares das suas funções religiosas, nomeadamente:

- a) Criar escolas particulares e cooperativas;
- b) Praticar beneficência dos crentes, ou de quaisquer pessoas;
- c) Promover as próprias expressões culturais ou a educação e a cultura em geral;
- d) Utilizar meios de comunicação social próprios para o prosseguimento das suas actividades.

Artigo 28.º Direito de audiência sobre instrumentos de planeamento territorial

1 — As igrejas e demais comunidades religiosas inscritas têm o direito de serem ouvidas quanto às decisões relativas à afectação de espaço a fins religiosos em instrumentos de planeamento territorial daquelas áreas em que tenham presença social organizada.

2 — Os planos municipais de ordenamento do território e demais instrumentos de planeamento territorial devem prever a afectação de espaços a fins religiosos.

Artigo 29.º Utilização para fins religiosos de prédios destinados a outros fins

1 — Havendo acordo do proprietário, ou da maioria dos condóminos no caso de edifício em propriedade horizontal, a utilização para fins religiosos do prédio ou da fracção destinados a outros fins não pode ser fundamento de objecção, nem da aplicação de sanções, pelas autoridades administrativas ou autárquicas, enquanto não existir uma alternativa adequada à realização dos mesmos fins.

2 — O disposto no n.º 1 não prejudica os direitos dos condóminos recorrerem a juízo nos termos gerais.

Artigo 30.º Bens religiosos

1 — Nenhum templo, edifício, dependência ou objecto do culto pode ser demolido ou destinado a outro fim, a não ser por acordo prévio com a respectiva igreja ou comunidade religiosa, por expropriação por utilidade pública ou por requisição, em caso de urgente necessidade

pública, salvo quando a demolição se torne necessária por a construção ameaçar ruína ou oferecer perigo para a saúde pública.

2 — Nos casos de expropriação, de requisição e de demolição referidos no número anterior, é ouvida, sempre que possível, a respectiva igreja ou comunidade religiosa. Esta tem igualmente direito de audição prévia na determinação da execução de obras necessárias para corrigir más condições de salubridade, solidez ou segurança contra o risco de incêndio e na classificação de bens religiosos como de valor cultural.

3 — Em qualquer caso, não será praticado acto algum de apropriação ou de utilização não religiosa sem que previamente os bens tenham sido privados da sua natureza religiosa pela respectiva igreja ou comunidade religiosa.

Artigo 31.º Prestações livres de imposto

1 — As igrejas e demais comunidades religiosas podem livremente, sem estarem sujeitas a qualquer imposto:

- a) Receber prestações dos crentes para o exercício do culto e ritos, bem como donativos para a realização dos seus fins religiosos, com carácter regular ou eventual;
- b) Fazer colectas públicas, designadamente dentro ou à porta dos lugares de culto, assim como dos edifícios ou lugares que lhes pertençam;
- c) Distribuir gratuitamente publicações com declarações, avisos ou instruções em matéria religiosa e afixá-las nos lugares de culto.

2 — Não está abrangido pelo disposto no número anterior o preço de prestações de formação, terapia ou aconselhamento espiritual, oferecidas empresarialmente.

Artigo 32.º Benefícios fiscais

1 — As pessoas colectivas religiosas inscritas estão isentas de qualquer imposto ou contribuição geral, regional ou local, sobre:

- a) Os lugares de culto ou outros prédios ou partes deles directamente destinados à realização de fins religiosos;
- b) As instalações de apoio directo e exclusivo às actividades com fins religiosos;
- c) Os seminários ou quaisquer estabelecimentos efectivamente destinados à formação dos ministros do culto ou ao ensino da religião;
- d) As dependências ou anexos dos prédios descritos nas alíneas a) a c) a uso de instituições particulares de solidariedade social;
- e) Os jardins e logradouros dos prédios descritos nas alíneas a) a d) desde que não estejam destinados a fins lucrativos.

2 — As pessoas colectivas religiosas inscritas estão igualmente isentas do imposto municipal de sisa e sobre as sucessões e doações ou quaisquer outros com incidência patrimonial substitutivos destes, quanto:

- a) Às aquisições de bens para fins religiosos;
- b) Aos actos de instituição de fundações, uma vez inscritas como pessoas colectivas religiosas.

3 — Os donativos atribuídos pelas pessoas singulares às pessoas colectivas religiosas inscritas para efeitos de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares são dedutíveis à colecta em valor correspondente a 25% das importâncias atribuídas, até ao limite de 15% da colecta.

4 — Uma quota equivalente a 0,5% do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, liquidado com base nas declarações anuais, pode ser destinada pelo contribuinte, para fins religiosos ou de beneficência, a uma igreja ou comunidade religiosa radicada no País, que indicará na declaração de rendimentos, desde que essa igreja ou comunidade religiosa tenha requerido o benefício fiscal.

5 — As verbas destinadas, nos termos do número anterior, às igrejas e comunidades religiosas são entregues pelo Tesouro às mesmas ou às suas organizações representativas, que apresentarão na Direcção Geral dos Impostos relatório anual do destino dado aos montantes recebidos.

6 — O contribuinte que não use a faculdade prevista no n.º 4 pode fazer uma consignação fiscal equivalente a favor de uma pessoa colectiva de utilidade pública de fins de beneficência ou de assistência ou humanitários ou de uma instituição particular de solidariedade social, que indicará na sua declaração de rendimentos.

7 — As verbas a entregar às entidades referidas nos n.ºs 4 e 6 devem ser inscritas em rubrica própria no Orçamento do Estado.

Capítulo IV

Estatuto das igrejas e comunidades religiosas

Artigo 33.º Personalidade jurídica das pessoas colectivas religiosas
Podem adquirir personalidade jurídica pela inscrição no registo das pessoas colectivas religiosas, que é criado no departamento governamental competente:

- a) As igrejas e demais comunidades religiosas de âmbito nacional ou, em sua vez, as organizações representativas dos crentes residentes em território nacional;

- b) As igrejas e demais comunidades religiosas de âmbito regional ou local;
- c) Os institutos de vida consagrada e outros institutos, com a natureza de associações ou de fundações, fundados ou reconhecidos pelas pessoas colectivas referidas nas alíneas a) e b) para a prossecução dos seus fins religiosos;
- d) As federações ou as associações de pessoas colectivas referidas nas alíneas anteriores.

Artigo 34.º Requisitos da inscrição no registo

O pedido de inscrição é dirigido ao departamento governamental competente e instruído com os estatutos e outros documentos que permitam inscrever:

- a) O nome, que deverá permitir distingui-lo de qualquer outra pessoa colectiva religiosa existente em Portugal;
- b) A constituição, instituição ou estabelecimento em Portugal da organização correspondente à igreja ou comunidade religiosa ou o acto de constituição ou fundação e, eventualmente, também o de reconhecimento da pessoa colectiva religiosa;
- c) A sede em Portugal;
- d) Os fins religiosos;
- e) Os bens ou serviços que integram ou deverão integrar o património;
- f) As disposições sobre formação, composição, competência e funcionamento dos seus órgãos;
- g) As disposições sobre a extinção da pessoa colectiva;
- h) O modo de designação e os poderes dos seus representantes;
- i) A identificação dos titulares dos órgãos em efectividade de funções e dos representantes e especificação da competência destes últimos.

Artigo 35.º Inscrição de igrejas ou comunidades religiosas

A inscrição das igrejas ou comunidades religiosas de âmbito nacional, ou de âmbito regional ou local, quando não sejam criadas ou reconhecidas pelas anteriores, é ainda instruída com prova documental:

- a) Dos princípios gerais da doutrina e da descrição geral de prática religiosa e dos actos do culto e, em especial, dos direitos e deveres dos crentes relativamente à igreja ou comunidade religiosa, devendo ser ainda apresentado um sumário de todos estes elementos;
- b) Da sua existência em Portugal, com especial incidência sobre os factos que atestam a presença social organizada, a prática religiosa e a duração em Portugal.

Artigo 36.º Inscrição de organização representativa dos crentes residentes em território nacional

1 — As igrejas e comunidades religiosas que tenham âmbito supranacional podem instituir uma organização representativa dos crentes residentes no território nacional, que requererá a sua própria inscrição no registo, em vez da inscrição da parte da igreja ou comunidade religiosa existente no território nacional.

2 — A inscrição está sujeita às mesmas condições da inscrição de igrejas ou comunidades religiosas de âmbito nacional.

Artigo 37.º Igrejas e comunidades religiosas radicadas no País

1 — Consideram-se radicadas no País as igrejas e comunidades religiosas inscritas com garantia de duração, sendo a qualificação atestada pelo membro do Governo competente em razão da matéria, em vista do número de crentes e da história da sua existência em Portugal, depois de ouvir a Comissão da Liberdade Religiosa.

2 — O atestado não poderá ser requerido antes de 30 anos de presença social organizada no País, salvo se se tratar de igreja ou comunidade religiosa fundada no estrangeiro há mais de 60 anos. O atestado é averbado no registo.

3 — O requerimento do atestado será instruído com a prova dos factos que o fundamentam, aplicando-se o disposto no artigo 38.º.

Artigo 38.º Diligências instrutórias complementares

1 — Se o requerimento de inscrição ou atestado estiver insuficientemente instruído, será o requerente convidado a suprir as faltas no prazo de 60 dias.

2 — Com vista à prestação de esclarecimentos ou de provas adicionais, o requerente poderá igualmente ser convidado para uma audiência da Comissão da Liberdade Religiosa, especificando-se a matéria e a ordem de trabalhos.

3 — Qualquer dos convites deverá ser feito no prazo de 90 dias da entrada do requerimento de inscrição.

Artigo 39.º Recusa da inscrição

A inscrição só pode ser recusada por:

- a) Falta dos requisitos legais;
- b) Falsificação de documento;
- c) Violação dos limites constitucionais da liberdade religiosa.

Artigo 40.º Inscrição obrigatória

1 — Torna-se obrigatória a inscrição, passado um ano sobre a entrega do requerimento de inscrição, se entretanto não for enviada notificação da recusa de inscrição por carta registada ao requerente.

2 — O prazo referido no número anterior, no caso da inscrição de igrejas ou comunidades religiosas ou da respectiva organização

representativa, é suspenso pelo prazo do suprimento das faltas ou da audiência referido no artigo 38.º.

Artigo 41.º Modificação dos elementos ou circunstâncias do assento

As modificações dos elementos do assento da pessoa colectiva religiosa, ou das circunstâncias em que ele se baseou, devem ser comunicadas ao registo.

Artigo 42.º Extinção das pessoas colectivas religiosas

1 — As pessoas colectivas religiosas extinguem-se:

- a) Por deliberação dos seus órgãos representativos;
- b) Pelo decurso do prazo, se tiverem sido constituídas temporariamente;
- c) Pela verificação de qualquer outra causa extintiva prevista no acto da constituição ou nas suas normas internas;
- d) Por decisão judicial, pelas causas de extinção judicial das associações civis.

2 — A extinção da pessoa colectiva religiosa implica o cancelamento do assento no respectivo registo.

Artigo 43.º Capacidade das pessoas colectivas religiosas

A capacidade das pessoas colectivas religiosas abrange todos os direitos e obrigações necessários ou convenientes à prossecução dos seus fins.

Artigo 44.º Pessoas colectivas privadas com fins religiosos

As associações e fundações com fins religiosos podem ainda adquirir personalidade jurídica nos termos previstos no Código Civil para as pessoas colectivas privadas, ficando então sujeitas às respectivas normas, excepto quanto à sua actividade com fins religiosos.

Capítulo V

Acordos entre pessoas colectivas religiosas e o Estado

Artigo 45.º Acordos entre igrejas ou comunidades religiosas e o Estado

As igrejas ou comunidades religiosas radicadas no País ou as federações em que as mesmas se integram podem propor a celebração de acordos com o Estado sobre matérias de interesse comum.

Artigo 46.º Processo de celebração dos acordos

1 — A proposta de acordo é apresentada em requerimento de abertura de negociações dirigido ao membro do Governo responsável pela área

da Justiça, acompanhado de documentação comprovativa da verificação da conformidade referida na alínea a) do artigo 47.º.

2 — Depois de ouvir sobre a proposta de acordo a Comissão da Liberdade Religiosa, o membro do Governo responsável pela área da Justiça pode:

- a) Recusar justificadamente a negociação do acordo;
- b) Nomear uma comissão negociadora, composta por representantes dos ministérios interessados e por igual número de cidadãos portugueses designados pela igreja ou comunidade religiosa, com o encargo de elaborar um projecto de acordo ou um relato das razões da sua impraticabilidade. O presidente da Comissão é designado pelo Ministro.

Artigo 47.º Fundamentos de recusa da negociação do acordo

São fundamentos de recusa da negociação do acordo:

- a) Não estar assegurado que as normas internas ou a prática religiosa da igreja ou comunidade religiosa se conformem com as normas da ordem jurídica portuguesa;
- b) Não terem decorrido cinco anos sobre a recusa de proposta anterior;
- c) Não ser necessária a aprovação de uma nova lei para alcançar os objectivos práticos da proposta;
- d) Não merecer aprovação o conteúdo essencial da proposta.

Artigo 48.º Celebração do acordo

1 — Uma vez aprovado em Conselho de Ministros, o acordo é assinado pelo Primeiro-Ministro e pelos Ministros competentes em razão da matéria, do lado do Governo, e pelos representantes da igreja ou da comunidade religiosa ou da federação.

2 — O acordo só entrará em vigor depois da sua aprovação por lei da Assembleia da República.

Artigo 49.º Proposta de lei de aprovação do acordo

O acordo é apresentado à Assembleia da República com a proposta da lei que o aprova.

Artigo 50.º Alterações do acordo

Até à deliberação da Assembleia da República que aprovar o acordo, este pode ser alterado por acordo das partes, devendo qualquer alteração ser imediatamente comunicada à Assembleia da República.

Artigo 51.º Outros acordos

As pessoas colectivas religiosas podem celebrar outros acordos com o Estado, as Regiões Autónomas e as autarquias locais para a realização do seus fins, que não envolvam a aprovação de uma lei.

Capítulo VI

Comissão da Liberdade Religiosa

Artigo 52.º Comissão da Liberdade Religiosa

É criada a Comissão da Liberdade Religiosa, órgão independente de consulta da Assembleia da República e do Governo.

Artigo 53.º Funções

1 — A Comissão tem funções de estudo, informação, parecer e proposta em todas as matérias relacionadas com a aplicação da Lei de Liberdade Religiosa, com o desenvolvimento, melhoria e eventual revisão da mesma Lei e, em geral, com o direito das religiões em Portugal.

2 — A Comissão tem igualmente funções de investigação científica das igrejas, comunidades e movimentos religiosos em Portugal.

Artigo 54.º Competência

1 — No exercício das suas funções compete, nomeadamente, à Comissão:

- a) Emitir parecer sobre os projectos de acordos entre igrejas ou comunidades religiosas e o Estado;
- b) Emitir parecer sobre a radicação no País de igrejas ou comunidades religiosas;
- c) Emitir parecer sobre a composição da Comissão do Tempo de Emissão das Confissões Religiosas;
- d) Emitir os pareceres sobre a inscrição de igrejas ou comunidades religiosas que forem requeridos pelo serviço do registo das pessoas colectivas religiosas;
- e) Estudar a evolução dos movimentos religiosos em Portugal e, em especial, reunir e manter actualizada a informação sobre novos movimentos religiosos, fornecer a informação científica e estatística necessária aos serviços, instituições e pessoas interessadas e publicar um relatório anual sobre a matéria;
- f) Elaborar estudos, informações, pareceres e propostas que lhe forem cometidos por lei, pela Assembleia da República, pelo Governo ou por própria iniciativa.

2 — A Comissão elabora o seu próprio regulamento interno.

Artigo 55.º Coadjuvação de serviços e entidades públicas

No exercício das suas funções a Comissão tem direito a coadjuvação dos serviços e outras entidades públicas.

Artigo 56.º Composição e funcionamento

1 — A Comissão é constituída pelas pessoas agrupadas nas duas alíneas seguintes:

a) O Presidente, dois membros designados pela Conferência Episcopal Portuguesa e três membros designados pelo membro do Governo competente na área da Justiça de entre as pessoas indicadas pelas igrejas ou comunidades religiosas não católicas radicadas no País e pelas federações em que as mesmas se integrem, tendo em consideração a representatividade de cada uma e o princípio da tolerância;

b) Cinco pessoas de reconhecida competência científica nas áreas relativas às funções da Comissão designadas pelo membro do Governo competente na área da Justiça, de modo a assegurar o pluralismo e a neutralidade do Estado em matéria religiosa.

2 — Terão assento na Comissão, sempre que esta o entender necessário ou conveniente, representantes governamentais nas áreas da Justiça, das Finanças, da Administração Interna e do Trabalho e Solidariedade designados a título permanente, que não terão direito a voto.

3 — Quando a questão sob apreciação diga respeito a ministério diferente dos indicados no n.º 2, pode participar nas sessões correspondentes um representante do Ministério em causa.

4 — O mandato dos membros da Comissão é trienal e poderá ser renovado.

5 — Os membros da Comissão têm o direito de fazer lavrar voto de vencido nos pareceres referidos nas alíneas a), b), c) e d) do artigo 54.º, quando tenham participado na deliberação que os aprovou.

6 — A Comissão pode funcionar em plenário ou em comissão permanente.

Artigo 57.º Presidente e regime de funcionamento

1 — O presidente da Comissão é designado pelo Conselho de Ministros por períodos de três anos, renováveis, de entre juristas de reconhecido mérito.

2 — As funções de presidente são consideradas de investigação científica de natureza jurídica e podem ser exercidas em regime de acumulação com a docência em regime de dedicação exclusiva.

3 — O regime de funcionamento da Comissão e dos seus serviços de apoio e o estatuto jurídico do respectivo pessoal são objecto de diploma do Governo.

Capítulo VII Igreja Católica

Artigo 58.º Legislação aplicável à Igreja Católica

Fica ressalvada a Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa de 7 de Maio de 1940, o Protocolo Adicional à mesma de 15 de Fevereiro de 1975, bem como a legislação aplicável à Igreja Católica, não lhe sendo aplicáveis as disposições desta lei relativas às igrejas ou comunidades religiosas inscritas ou radicadas no País, sem prejuízo da adopção de quaisquer disposições por acordo entre o Estado e a Igreja Católica ou por remissão da lei.

Capítulo VIII

Disposições complementares e transitórias

Artigo 59.º Alteração do artigo 1615.º do Código Civil

O artigo 1615.º do Código Civil passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 1615.º

Publicidade e forma

A celebração do casamento é pública e está sujeita, segundo a vontade dos nubentes:

a) À forma fixada neste Código e nas leis do registo civil;

b) À forma religiosa, nos termos de legislação especial».

Artigo 60.º Alteração da alínea b) do artigo 1654.º do Código Civil

A alínea b) do artigo 1654.º do Código Civil passa a ter a seguinte redacção:

«b) Os assentos dos casamentos civis urgentes ou por forma religiosa celebrados em Portugal;»

Artigo 61.º Alteração do n.º 2 do artigo 1670.º do Código Civil

O n.º 2 do artigo 1670.º do Código Civil passa a ter a seguinte redacção:

«2 — Ficam, porém, ressalvados os direitos de terceiro que sejam compatíveis com os direitos e deveres de natureza pessoal dos cônjuges e dos filhos, a não ser que, tratando-se de registo por transcrição, esta tenha sido feita dentro dos sete dias subsequentes à celebração».

Artigo 62.º Legislação expressamente revogada

Ficam expressamente revogados a Lei n.º 4/71, de 21 de Agosto, e o Decreto n.º 216/72, de 27 de Junho.

Artigo 63.º Confissões religiosas e associações religiosas não católicas actualmente inscritas

1 — As confissões religiosas e as associações religiosas não católicas inscritas no correspondente registo do departamento governamental competente conservam a sua personalidade jurídica e a sua capacidade, passando a estar sujeitas à presente lei quanto às suas actividades religiosas, nos termos do artigo 44.º.

2 — As mesmas confissões e associações podem requerer a sua conversão em uma pessoa colectiva religiosa nos termos dos artigos 34.º a 40.º, mediante o preenchimento dos respectivos requisitos, no prazo de três anos desde a entrada em vigor da presente lei.

3 — Se o não fizerem, passarão a estar inscritas apenas no Registo Nacional das Pessoas Colectivas, para onde serão remetidos os processos e os documentos que serviram de base aos respectivos registos.

4 — Passado o prazo referido no n.º 2, é extinto o actual registo de confissões religiosas e associações religiosas não católicas do Ministério da Justiça.

Artigo 64.º Segurança social

Aos ministros que vêm beneficiando do regime de segurança social instituído pelo Decreto Regulamentar n.º 5/83, de 31 de Janeiro, e que pertençam a confissões religiosas ou associações religiosas referidas no artigo anterior, que não se convertam em pessoas colectivas religiosas, continua aplicável o respectivo regime.

Artigo 65.º Isenção do imposto sobre o valor acrescentado

1 — As igrejas e comunidades religiosas radicadas no País, bem como os institutos de vida consagrada e outros institutos, com a natureza de associações ou fundações, por aquelas fundados ou reconhecidos, e ainda as federações e as associações em que as mesmas se integrem, poderão optar pelo regime previsto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 20/90, de 13 de Janeiro, enquanto vigorar, não se lhes aplicando, nesse caso, os n.ºs 3 e 4 do artigo 32.º da presente lei.

2 — As instituições particulares de solidariedade social que tenham pedido a restituição do imposto sobre o valor acrescentado no período a que respeita a colecta não poderão beneficiar da consignação prevista no n.º 5 do artigo 32.º.

Artigo 66.º Entrada em vigor dos benefícios fiscais

Os artigos 32.º e 65.º entram em vigor na data do início do ano económico seguinte ao da entrada em vigor da presente lei.

Artigo 67.º Radicação no País

O tempo de presença social organizada no País necessário para as igrejas e comunidades religiosas inscritas requererem o atestado de que estão radicadas no País a que se refere a regra da primeira parte do n.º 2 do artigo 37.º é de 26 anos em 2001, de 27 anos em 2002, de 28 anos em 2003 e de 29 anos em 2004.

Artigo 68.º Códigos e leis fiscais

O Governo fica autorizado a introduzir nos códigos e leis fiscais respectivos o regime fiscal decorrente da presente lei.

Artigo 69.º Legislação complementar

O Governo deve tomar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da presente lei e publicar, no prazo de 60 dias, a legislação sobre o registo das pessoas colectivas religiosas e sobre a Comissão da Liberdade Religiosa.

Aprovado em 26 de Abril de 2001. — O Presidente da Assembleia da República, *António de Almeida Santos*.

Mensagem do Sr. Presidente da República fundamentando a promulgação da lei

Promulguei, nesta data, a Lei da Liberdade Religiosa recentemente aprovada pela Assembleia da República.

Trata-se de um diploma fundamental para a garantia da liberdade de consciência, de religião e de culto e para a concretização de princípios estruturantes do Estado de Direito democrático, como são, neste domínio, os princípios da igualdade, da separação entre o Estado e as igrejas e da não confessionalidade do Estado.

A lei agora aprovada pela Assembleia da República é fruto de um labor de estudo, reflexão e consensualização desenvolvido ao longo de vários anos e que mereceu, não apenas um apoio significativo por parte dos partidos políticos como se comprova pela votação na especialidade da grande maioria das suas disposições, como também o acordo genérico das diferentes confissões religiosas.

Com efeito, a lei da liberdade religiosa agora aprovada pela Assembleia da República é, em meu entender, um diploma globalmente positivo que resolve de forma equilibrada, e em conformidade aos princípios constitucionais, muitos dos delicados problemas que se colocam à garantia da liberdade de religião e culto das confissões religiosas.

Neste sentido, é profundamente convicto da sua oportunidade e mérito que decidi promulgar, de imediato, um diploma que reputo da maior importância para a coerência, completude e estabilidade do direito das religiões no Portugal democrático.

São públicas, no entanto, as dúvidas suscitadas no debate que, a propósito, se desenvolveu na Assembleia da República. Elas incidiram, sobretudo, numa das disposições da lei da liberdade religiosa - a que exclui a Igreja Católica da aplicabilidade de parte da presente lei e que ressalva a vigência da legislação que lhe é actualmente aplicável - e foram consideradas pertinentes por Deputados de diferentes partidos.

Essa atitude reflecte a atenção dedicada às questões da igualdade e da proibição de discriminações e é, nesse sentido, um factor estimulante do acompanhamento, por parte da Assembleia da República, da aplicação da presente lei e, nessa medida, da realização dos direitos fundamentais.

Todavia, não considere existirem razões de fundo que impusessem, por esse facto, o envio da lei ao Tribunal Constitucional e que sobrelevassem o interesse geral na sua imediata entrada em vigor. Formei esse juízo na convicção de que o facto de a lei da liberdade religiosa manter em vigor a legislação actualmente aplicável à Igreja Católica, por si só, nada decide em definitivo sobre o regime que virá a ser futuramente aprovado nem pretende ter a virtualidade de sanar a eventual inconstitucionalidade de algumas normas actualmente em vigor. Por outro lado, o facto de a actual lei da liberdade religiosa não ser aplicável, como um todo, à Igreja Católica não implica necessariamente, por si só, a desigualdade material dos regimes jurídicos aplicáveis no futuro às diferentes confissões.

Tudo dependerá do conteúdo de cada um desses regimes e da forma definitiva que eles vierem a assumir.

Ora, é precisamente no que se refere à diversidade desses regimes, e apesar do referido juízo largamente positivo que faço desta lei da liberdade religiosa, que pretendo sugerir que a Assembleia da República pondere algumas situações que, não tendo directamente como causa originária a lei agora aprovada, não são por ela resolvidas de forma integralmente satisfatória. Refiro-me especificamente à dualidade e diversidade de regime de benefícios fiscais que continuará a ser aplicado à Igreja Católica e às outras igrejas e comunidades religiosas, por força da presente lei e da manutenção em vigor de outra legislação.

Independentemente da dificuldade em chegar a soluções óptimas, há que garantir que os regimes agora aprovados e a sua diversidade não ofendam os princípios da igualdade e da razoabilidade próprios de Estado de Direito, bem como o princípio da neutralidade religiosa e da laicidade do Estado.

Compreendo que não seja fácil ao legislador compatibilizar, de forma integralmente aceitável, os interesses e perspectivas diferentes que aqui se desenvolvem, mas entendo que o primeiro passo para a resolução dos problemas ainda pendentes será a consciência de que a solução agora encontrada não é nem deve ser definitiva, estando desde logo sujeita à reavaliação que resultar da revisão, em curso, da Concordata, na medida em que esta foi invocada como fundamento da referida diversidade. De resto, a própria lei aponta para o carácter transitório deste regime quando prevê a faculdade de as confissões religiosas radicadas no País optarem, com prejuízo da possibilidade agora facultada de consignação fiscal, pelo regime do IVA aplicável à Igreja Católica enquanto este vigorar.

O que aqui pretendo deixar aos Srs. Deputados é, precisamente, a necessidade de nos empenharmos, todos, na garantia legislativa da igualdade das prestações e benefícios a atribuir, directa ou indirectamente, pelo Estado às diferentes igrejas e comunidades religiosas e da razoabilidade qualitativa dos encargos indirectamente impostos aos cidadãos.

Neste sentido, assume particular relevância, não apenas o acompanhamento do processo de revisão da Concordata e dos outros acordos a celebrar entre o Estado e outras igrejas e comunidades religiosas, como também das alterações consequentes das leis fiscais a que terá que se proceder.

A lei que acabo de promulgar é um passo decisivo e indispensável na garantia plena da liberdade religiosa. A manutenção de situações ainda não definitivamente estabilizadas não deverá, em meu entender, condicionar a sua imediata entrada em vigor, mas antes estimular a reflexão e o empenhamento de todos no sentido da sua resolução em conformidade aos princípios constitucionais da igualdade, da não discriminação, da autonomia individual e da não confessionalidade do Estado.

Lisboa, 6 de Junho de 2001. — O Presidente da República, *Jorge Sampaio*.